

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos RIT O-297-2024 del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, por sentencia de treinta de agosto de dos mil veinticuatro, los jueces señores Carlos Iturra Lizana, Raúl Díaz Manosalva y doña Denisse Ehrenfeld Ebbinghaus, condenaron al imputado Rodrigo Abraham Lagos Sáez al cumplimiento efectivo de la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y multa de una unidad tributaria mensual, más accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito del delito de receptación de vehículo motorizado, en grado de consumado, cometido el día 25 de agosto de 2023 en la comuna de Conchalí, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A inciso tercero del Código Penal.

En contra del referido fallo, la Abogada Defensora Penal Público, doña Bárbara Antivero Pinochet, dedujo recurso de nulidad.

Concedido el recurso y elevados los autos para el conocimiento de esta Corte, con fecha veintidós de octubre de este año se procedió a la vista de la causa, escuchándose los alegatos de una abogada de la Defensoría Penal Pública y de un abogado del Ministerio Público.

Se fijó como fecha de lectura de esta sentencia el día de hoy.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su impugnación en la causal de la letra e) del artículo 374, con relación a la letra c) del artículo 342 y al artículo 297, todas disposiciones del Código Procesal Penal.

Para sustentar su refutación sostiene, en síntesis, que “Si bien el Tribunal otorga razones en su fallo para establecer la existencia del delito y la participación del acusado, estas resultan insuficientes para efectos de satisfacer lo preceptuado por el artículo 297 antes dicho, en tanto se fundan en conclusiones que no se encuentran debidamente corroboradas.”, criticando, en consecuencia, que los sentenciadores habrían transgredidos los principios de razón suficiente y de corroboración.

En efecto, arguye que dicha infracción se verifica en dos puntos: primero, al estimarse que el relato de los dos funcionarios policiales fueron



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LEXVXQZXYBV

contestes entre sí, careciendo de corroboración en relación con el resto de la prueba, en particular con la declaración del acusado, atendido que el imputado no declaró ante los funcionarios; y segundo, al no hacerse cargo la sentencia recurrida cómo fueron obtenidas las llaves originales de la moto, donde estaban para poder de esa manera llegar a determinar la posesión y tenencia de la motocicleta en relación al acusado.

Concluye solicitando que se acoja el recurso por esta causal y, en consecuencia, se celebre un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado.

SEGUNDO: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”*.

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*.

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa:

“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.”

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

TERCERO: Que, en concepto de esta Corte, el fallo da cumplimiento a las disposiciones que el recurrente reprocha como incumplidas, puesto que contiene la exposición clara, lógica y completa de



los hechos que se dieron por probados y de los que no, conclusiones a las que arriban los sentenciadores del grado tras valorar los medios de prueba que las fundan, sin infringir en dicha tarea los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, ni los conocimientos científicamente afianzados;

CUARTO: Que, en primer lugar, en relación al reproche que plantea la transgresión de los principios de razón suficiente y de corroboración, aparece pertinente recordar que las leyes universales de la lógica que se presentan como necesarias al raciocinio exteriorizado y como garantía de su corrección, están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y de la derivación.

De la coherencia, entendida como la concordancia que ha de existir entre los elementos del pensamiento, se deducen los principios de identidad, de la no contradicción y del tercero excluido.

A su vez, de la derivación, que es concebida como una regla que expresa que cada pensamiento debe provenir de otro con el cual está relacionado, se extrae el principio de razón suficiente, según el cual, para ser verdadero, todo juicio necesita de una razón suficiente. En términos más comunes, nada es “porque sí” sino que debe estar suficientemente fundado.

Por su parte, las relaciones ratificatorias que impone al juzgador el principio de corroboración se expresan como inferencias inductivas que se orientan a confirmar en un cierto grado la verdad de una hipótesis, como una posible explicación de la existencia de ese elemento de juicio.

De lo reseñado, es posible colegir que una motivación fáctica podrá ser calificada de lógica cuando se sujeta a las reglas para el recto entendimiento humano exteriorizado. Por ende, debe ser coherente, de modo que podrá tacharse de defectuosa si es incongruente, contradictoria, equivoca o ambigua y, además, debe ser derivada, vale decir, es menester que se encuentre constituida por inferencias razonables, deducidas de las pruebas y de la sucesión de datos extraídos de las probanzas;

QUINTO: Que, ahora bien, en la línea de lo que se viene razonando es necesario señalar que el fallo materia de reproche expresa pormenorizadamente las razones fácticas, jurídicas y las simplemente lógicas, en cuya virtud asigna valor a cada una de las pruebas o antecedentes del proceso para, subsiguientemente, en razón de tales reflexiones tener por



establecida la concurrencia de los elementos que exige el tipo penal previsto en el artículo 456 bis A inciso tercero del Código Penal, de manera que el examen que realiza conduce racionalmente a la conclusión que convence al tribunal del grado, de la existencia de los hechos ilícitos y de la participación que en ellos correspondió al acusado, de forma tal que resulta legítimo concluir que sus razonamientos satisfacen plenamente la exigencia legal contenida en los artículos 342 y 297 del Código Procesal Penal;

SEXTO: Que en lo que respecta, ahora, a la denuncia de falta de valoración y confrontación, no solo de la prueba sino de las teorías alternativas que se hacen valer en juicio, lo que se engloba en la crítica genérica de “falta de fundamentación del fallo”, es menester relevar que en el considerando NOVENO se consigna que en virtud de la valoración que se efectúa a la prueba incorporada en la audiencia de juicio oral, apreciada conforme prevé el artículo 297 del aludido estatuto normativo, se reúne el estándar necesario para dar por acreditada, más allá de toda duda razonable, en primer término, la participación que correspondió al acusado Lagos Saez en la comisión del delito consumado de receptación de vehículo motorizado, señalando al efecto en el párrafo 17 del aludido considerando, que “...Acreditada la existencia del delito del cual provino el objeto material de la receptación, y aun cuando no se sepa quiénes fueron sus autores, resultó igualmente suficiente la prueba de cargo para acreditar que Lagos Sáez sabía o no podía menos que conocer que el vehículo que tenía en su poder había sido sustraído”; lo que se debe relacionar con las distintas versiones otorgadas por el acusado respecto del origen de la motocicleta, señalando a la funcionaria policial Génesis Urbina Aguayo, en una primera instancia, -antes de su detención-, al ser consultado en el interior del inmueble en cuestión por el origen de la moto sin placas patentes que “era de él”, para luego señalar al funcionario de la SIP que concurrió al lugar a petición de la anterior, Jordán Quezada Olave, -luego de encontrar en el patio delantero del inmueble una motocicleta sin placas patentes-, que “la moto la habían mandado guardar desde un taller cercano”; para luego incorporar una tercera versión de los hechos al declarar en la audiencia de juicio, al señalar que “El arrendatario de la casa de su ex señora es el dueño de la moto”, advirtiendo de esa manera el Tribunal el cambio de versiones



del acusado, sin entregar mayores datos en ninguna de las oportunidades, “ya sea el nombre y/o el lugar donde se encuentra el referido local a fin de eximirse, como sería esperable, de una responsabilidad que no le corresponde.”.

Por su parte, en el mismo fundamento, en el apartado destinado a analizar la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito de receptación de vehículo motorizado, en el párrafo tercero se expresa que “...Las declaraciones de los funcionarios policiales impresionan al tribunal como veraces, desde que dieron razón de sus dichos y se encuentran contestes entre sí y con el resto de la prueba de cargo. A su vez, no se advierte en ellos ánimo de perjudicar al acusado alterando los hechos que personalmente percibieron, por lo que se les dio pleno valor probatorio.”;

SÉPTIMO: Que, luego de lo dicho, es menester resaltar que contrariamente a lo que afirma el recurso, la sentencia impugnada enfrentando las alegaciones de la tesis absolutoria, las desestima fundadamente, precisamente, en razón del mérito de la prueba que pormenorizadamente refiere para ello.

Así, en relación a la supuesta carencia probatoria que la defensa resalta, señala el fallo, en su fundamento NOVENO, en su párrafo séptimo, que “...Una de las alegaciones efectuadas en juicio por la defensa se centró en que la referida propiedad ya no era el domicilio del acusado, ya que se había ido a vivir a otro lugar. En este mismo sentido, el acusado, al prestar declaración en juicio, expuso que ese domicilio era de su ex pareja ya que nueve días antes la P.D.I. lo había desalojado en virtud de una orden de alejamiento. Que, por eso mismo, ese día concurrió a la referida casa con su pareja, que lo espero a dos cuadras de distancia, con la finalidad de sacar sus pertenencias, ya que se había tenido que ir con lo puesto. Que, “llegando al lugar” -sic- apareció Paz Ciudadana y un carabinero que le preguntó qué hacía ahí si tenía una orden de alejamiento. Le contesto que quería sacar sus cosas.

Ahora bien, a la luz de la lógica, no resulta plausible la versión que entregó el encartado en juicio desde que no tendría sentido que se hubiese decretado el abandono del hogar común si llevaba días sin vivir en dicho lugar, en especial si consideramos que estas medidas se dictan y diligencian



con celeridad dada la necesidad de protección que ha de entregarse a las víctimas en cuyo favor se decretan. Tampoco resulta razonable como indicó el acusado, que una cautelar de esta naturaleza se le notifique por carabineros con posterioridad a haberse ejecutado su cumplimiento, pues conforme éste indicó, la PDI nueve días antes lo había obligado a hacer abandono de dicho lugar. Por lo demás, escapa a las máximas de la experiencia la intervención de la policía de investigaciones que refiere el encartado, desde que estas cautelares son siempre encargadas y materializadas por carabineros.

En este mismo sentido, la declaración de la testigo de la defensa también resultó, a la luz de la prueba rendida en juicio, inconsistente y poco plausible. En primer lugar, escasa información entregó respecto de los hechos de la causa, pues no recordaba día ni hora en que habrían sucedido limitándose a indicar que todo lo observo a una distancia de dos cuadras, sin siquiera mencionar la llegada posterior de más personal policial -Sip-. A su vez, se contradijo con el acusado. Primero porque dijo que él entraba a la casa cuando llegó carabineros mientras que él sostuvo que iba llegando al domicilio cuando apareció Paz Ciudadana. En segundo lugar, ella refiere que llevaban junto un mes de relación y cinco días de convivencia a diferencia del encartado que indicó que ella esperaba un hijo suyo y que por eso se había separado de su ex señora, lo que permite inferir de los dichos de éste que la relación entre ambos debió tener una data mayor al mes que indicó Bárbara López.

De esta manera, a la luz de un análisis sistemático de la prueba, considerando la inverosimilitud de lo aseverado por el acusado y su testigo, este Tribunal, otorga plena credibilidad y valor a la prueba de cargo y, desde ella, infiere que el domicilio de calle Filadelfia en que fue notificado Lagos Sáez correspondía al lugar en que vivía al tiempo de los hechos, desde que salió de su interior ante la llamada de carabineros. Siendo así, por tanto, plenamente plausible y acorde a la lógica y máximas de la experiencia, que conforme indicó la funcionaria policial Génesis Uribe, fue notificado de la cautelar decretada en su contra en su domicilio, lugar del cual se le exigió salir en forma inmediata y, por tanto, la carabinero,



esperándolo en el living de su casa le dio tiempo para salir con sus cosas personales.”.

OCTAVO: Que de esta manera, de la lectura del motivo NOVENO, en que los sentenciadores realizan la valoración de la prueba y en que la sentencia se hace cargo de las alegaciones de la defensa, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, es posible concluir, sin dificultad, que el fallo contiene un estudio exhaustivo de los medios probatorios rendidos en el proceso y su correspondiente valoración, dando cumplimiento los jueces a las prescripciones del artículo 297 del Código Procesal Penal, quienes de este modo tuvieron por acreditados los hechos en la forma en que se ha dicho, como asimismo, la participación que en ellos correspondió al acusado Lagos Sáez, encontrándose de esta forma fundamentada la sentencia impugnada, alcanzándose así el objetivo legal de que tanto los intervinientes como el acusado o, bien, cualquier ciudadano, puedan conocer los motivos o razones que se tuvieron en consideración para condenar;

NOVENO: Que, entonces, según puede colegirse, lo atacado por la recurrente a través de este medio de impugnación no es exactamente la valoración de la prueba, sino la conclusión a la que arribó el tribunal del fondo, en cuanto a tener por acreditados los hechos punibles y la participación en ellos del encausado, que es una cosa diferente, todo lo que queda en evidencia con la fundamentación del arbitrio en estudio, puesto que si bien se reprocha una supuesta “falta de fundamentación suficiente”, ello no se intentó justificar, ni quedó demostrado en el recurso y, por lo demás, todas las pretendidas inconsistencias probatorias, fueron asumidas y resueltas por el tribunal del fondo, no siendo ésta una instancia de apelación que permita a esta Corte revisar la corrección de tales decisiones;

DÉCIMO: Que, consecuentemente, en mérito de lo precedentemente reflexionado, se hace ineludible concluir que el 2º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, cuya sentencia se impugna, ha cimentado cabalmente su decisión y no ha incurrido, por ende, en la infracción del artículo 374 letra e), en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, que se le atribuye.



Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la abogada Defensora Penal Público doña Bárbara Antivero Pinochet, en representación de Rodrigo Abraham Lagos Saez, en contra de la sentencia dictada por el 2º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha treinta de agosto de este año, en los autos RIT O-297-2024, RUC N°2300924698-3, la que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase la competencia.

Redacción de la Ministra Suplente señora Soler.

Penal N° 5401-2024.

No firma la Ministra señora Villadangos, por estar haciendo uso de permiso administrativo, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Itma. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra suplente señora Andrea Soler Merino y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LEXVXQZXYBV

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Suplente Andrea Paola Soler M. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a treinta de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LEXVXQZXYBV